Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a seis de noviembre de dos mil veinticuatro.

**VISTOS** los expedientes electrónicos formados con motivo de los recursos de revisión números **05950/INFOEM/IP/RR/2024 y 05951/INFOEM/IP/RR/2024,** interpuestos por la **C. XXXXXXXXXXXXXX,** en lo sucesivo **La Recurrente,** en contra de las respuestas del **Ayuntamiento de Zinacantepec,** en lo subsecuente **El Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S D E L A S U N T O**

**PRIMERO.** **De la Solicitud de Información.**

Con fecha **veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro, La Recurrente,** presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (**SAIMEX)** ante **El Sujeto Obligado**, las solicitudes de acceso a la información pública, registradas bajo los números de expediente **00255/ZINACANT/IP/2024 y 00254/ZINACANT/IP/2024,** mediante las cuales solicitó información en el tenor siguiente:

**00255/ZINACANT/IP/2024**

“Acciones, protocolos o cualquier otra información mediante la cual la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de Zinacantepec, ha realizado las acciones necesarias para retirar, reubicar, multar a la base de taxis ubicada en la desviación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Méx, toda vez que corresponde a la jurisdicción de Zinacantepec, atender esta situación” **(Sic)**

**00254/ZINACANT/IP/2024**

“Acciones, protocolos o cualquier otra información mediante la cual la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de Zinacantepec, ha realizado las acciones necesarias para retirar, reubicar, multar a la base de taxis ubicada en en la Avenida XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Méx, toda vez que corresponde a la jurisdicción de Zinacantepec, atender esta situación” **(Sic)**

**Modalidad de entrega:** A través del SAIMEX, en los dos casos.

**SEGUNDO. De la respuesta del Sujeto Obligado.**

De las constancias de los expedientes electrónicos del **SAIMEX,** se advierte que **El Sujeto Obligado** emitió respuestas coincidentes a las solicitudes de información, en fecha **dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro,** resultando de nuestro interés lo siguiente:

“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:

En apego a lo establecido su solicitud fue analizada y turnada al área poseedora de la información, por lo que con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, donde se establece que, “Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se le requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones”. Por lo anterior, remito la respuesta proporcionada por el área competente” **(Sic)**

De forma complementaria, en los expedientes electrónicos de las solicitudes de información, **El Sujeto Obligado** adjuntó lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitud de información** | **Anexos** |
| **00255/ZINACANT/IP/2024** | * **“SAIMEX-00255-2024.pdf”** |
| **00254/ZINACANT/IP/2024** | * **“SAIMEX-00254-2024.pdf”** |

Soportes documentales en cita que serán materia de análisis en el considerando respectivo.

**TERCERO. Del recurso de revisión.**

Inconforme con las respuestas notificadas por **El Sujeto Obligado, La Recurrente** interpuso recursos de revisión, en fecha **uno de octubre de dos mil veinticuatro,** los cuales fueron registrados en el sistema electrónico con el expediente **05950/INFOEM/IP/RR/2024 y 05951/INFOEM/IP/RR/2024,** en los cuales arguye las siguientes manifestaciones de carácter coincidente:

**Acto impugnado:**

“Respuesta” **(Sic)**

**Razones o motivos de la inconformidad:**

“Agotaron los 15 días para dar este tipo de respuesta, cuando tenían 3 días para pronunciar su incompetencia, por ende corresponde a la Unidad de Transparencia de Zinacantepec, remitir mi solicitud al Sujeto Obligado que refieren en su respuesta, toda vez que ellos pretenden dilación en el procedimiento de acceso a la información, lo anterior de conformidad con el art. 167 de la Ley de Transparencia Estatal” **(Sic)**

**CUARTO. Del turno del recurso de revisión.**

Medios de impugnación que le fueron turnados por medio del sistema electrónico a los Comisionados José Martínez Vilchis y Luis Gustavo Parra Noriega, y, en términos del arábigo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, de los cuales recayeron en acuerdos de admisión en fechas **siete de octubre de dos mil veinticuatro,** determinándose, un plazo de siete días para que las partes manifestaran lo que a su derecho corresponda en términos de los numerales ya citados.

**QUINTO. De la acumulación.**

Posteriormente por acuerdo del Pleno del Instituto, en la Trigésima séptima sesión ordinaria celebrada el **dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro,** se determinó acumular los recursos de revisión en estudio, ya que existe identidad del solicitante, del sujeto obligado y similitud de causas y objeto de solicitud.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y con el artículo 18 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, los cuales establecen respectivamente:

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios***

*“Artículo 195. En la tramitación del recurso de revisión se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en el* ***Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México****.”* ***[Sic]***

***Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México***

*“Artículo 18.-* ***La autoridad administrativa*** *o el Tribunal* ***acordarán la acumulación*** *de los expedientes del procedimiento y proceso administrativo que ante ellos se sigan****, de oficio*** *o a petición de parte,* ***cuando las partes o los actos administrativos sean iguales, se trate de actos conexos o resulte conveniente el trámite unificado de los asuntos****, para evitar la emisión de resoluciones contradictorias. La misma regla se aplicará, en lo conducente, para la separación de los expedientes.”* ***[Sic]***

**SEXTO. De la etapa de instrucción.**

Así, una vez transcurrido el término legal referido, se advierte en los expedientes electrónicos **El Sujeto Obligado** fue omiso en rendir sus informes justificados.

Por lo que una vez transcurrido el plazo establecido para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, en fecha **diecisiete de octubre de los corrientes,** se decretó el cierre de instrucción, en términos del artículo 185 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, iniciando el término legal para dictar resolución definitiva del asunto.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver los presentes recursos de revisión interpuestos por la ahora Recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. Sobre los alcances del recurso de revisión.**

Derivado de la impugnación realizada, es preciso e importante señalar que el recurso de revisión inmerso en la Ley de Transparencia vigente en la entidad, tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el cual será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico, con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

**TERCERO. De las causas de improcedencia.**

En el procedimiento de acceso a la información y de los medios de impugnación de la materia, se advierten diversos supuestos de procedibilidad, los cuales deben estudiarse con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de legalidad y objetividad inmersos en el artículo 9 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en correlación con la seguridad jurídica que debe generar lo actuado ante este Organismo garante.

Siendo facultad de este Órgano entrar al estudio de las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que se adviertan de oficio por este Resolutor y por ende objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto, en los presupuestos procesales sobre el inicio o trámite de un proceso, generando eficacia jurídica en las resoluciones, máxime que se trata de una figura procesal adoptada en la ley de la materia, la cual impide su estudio y resolución cuando una vez admitido el recurso de revisión se advierta una causa de improcedencia que permita sobreseer el recurso de revisión, sin estudiar el fondo del asunto; circunstancias anteriores que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines[[1]](#footnote-1). Así las cosas, del análisis de los expedientes electrónicos no se advierte ninguna causa de improcedencia que se actualice ni mucho menos alguna hecha valer por alguna de las partes, procediendo al estudio del fondo del asunto, en los siguientes términos.

**CUARTO. Estudio y resolución del asunto**

El análisis del presente recurso, se basará en el contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico, para así estar en posibilidad este Órgano Colegiado de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y respetando en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Federal y el diverso 8 de la Ley de Transparencia local.

En este tenor, es necesario subrayar que el derecho de acceso a la información pública implica que cualquier persona conozca la información contenida en los documentos que se encuentren en los archivos de los sujetos obligados, conforme a los artículos 4, 12, 24 último párrafo y 160 de la Ley local en la materia, que a la letra citan:

***“Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

*Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.*

***Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.*

*(…)*

***Artículo 24.***

*(…)*

*Los sujetos obligados solo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones.”*

*(…)*

***Artículo 160.*** *Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se* *encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.*

*En caso que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.”****[Sic]***

Así que la obligación de los **Sujetos Obligados** de dar acceso a la información pública que generen, administren o posean, se tendrá por cumplida cuando el solicitante tenga a su disposición la información requerida, o cuando realice la consulta de la misma en el lugar que ésta se localice, de acuerdo a lo señalado por el artículo 166 de la Ley local en la materia, que se reproduce de la siguiente forma:

*“Artículo 166. La obligación de acceso a la información pública se tendrá por cumplida cuando el solicitante tenga a su disposición la información requerida, o cuando realice la consulta de la misma en el lugar en el que ésta se localice.”* ***[Sic]***

Una vez sentado lo anterior, de una interpretación literal a la solicitud de información **00255/ZINACANT/IP/2024 y 00254/ZINACANT/IP/2024** se desprenden las siguientes consideraciones:

* Que el derecho de acceso a la información pública estriba en la prerrogativa de carácter constitucional que reconoce la potestad de los ciudadanos para solicitar soportes documentales generados, poseídos o administrados por los **Sujetos Obligados.**
* Que fueron formulados **2 -dos-** requerimientos, respecto de los cuales no fue señalado un parámetro de inicio y conclusión para efectos de búsqueda de la información, debiendo de ser fijados del veintisiete de agosto de dos mil veintitrés al veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro. En puntual observancia al criterio **3/19** emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que dispone a la literalidad lo siguiente:

**“PERIODO DE BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN.**

En el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo respecto del cual requiere la información, o bien, de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, deberá considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud.

**Resoluciones**

**RRA 0022/17.** Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 16 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas.

<http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%2022.pdf>

**RRA 2536/17.** Secretaría de Gobernación. 07 de junio de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.

<http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%202536.pdf>

**RRA 3482/17.** Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 02 de agosto de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.

<http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%203482.pdf>” **[Sic]**

* Por otra parte, resulta oportuno destacar que cuando los particulares no identifican de forma precisa el documento requerido, bastará con que se remita cualquiera que refleje la información requerida. Al respecto, cobra relevancia el criterio emitido por el Órgano Garante Nacional con número **16/17** cuyo rubro y texto disponen a la literalidad lo siguiente:

**“EXPRESIÓN DOCUMENTAL.**

Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.

**Precedentes:**

* Acceso a la información pública. RRA 0774/16. Sesión del 31 de agosto de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Secretaría de Salud. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos.
* Acceso a la información pública. RRA 0143/17. Sesión del 22 de febrero de 2017. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.
* Acceso a la información pública. RRA 0540/17. Sesión del 08 de marzo del 2017. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Secretaría de Economía. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. “ **(Sic)**

Dichas precisiones, con fundamento en los artículos 13 y 181 cuarto párrafo de la Ley en materia, los cuales a la letra rezan:

**“Artículo 13.** El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.

**Artículo 181. …**

Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.” **[Sic]**

Bajo estas líneas argumentativas, al retomar y delimitar los requerimientos formulados por la ahora **Recurrente,** de manera objetiva se precisa que versa en conocer la siguiente información:

1. El o los documentos donde consten las acciones, protocolos o cualquier otra información, mediante la cual la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de Zinacantepec, realizó las acciones necesarias para retirar, reubicar o multar las bases de taxis referidas en las solicitudes de información **00255/ZINACANT/IP/2024 y 00254/ZINACANT/IP/2024, del** periodo comprendido del veintisiete de agosto de dos mil veintitrés al veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro.

Bajo este contexto, a efecto de identificar las unidades administrativas competentes se traen a colación los artículos 24, fracción XII, y 92, fracción II de la Ley de Transparencia local, porciones normativas cuyo contenido literal es el siguiente:

*“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:*

*XII. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones generales de transparencia previstas en la presente Ley o determinadas así por el Instituto, y en general aquella que sea de interés público;*

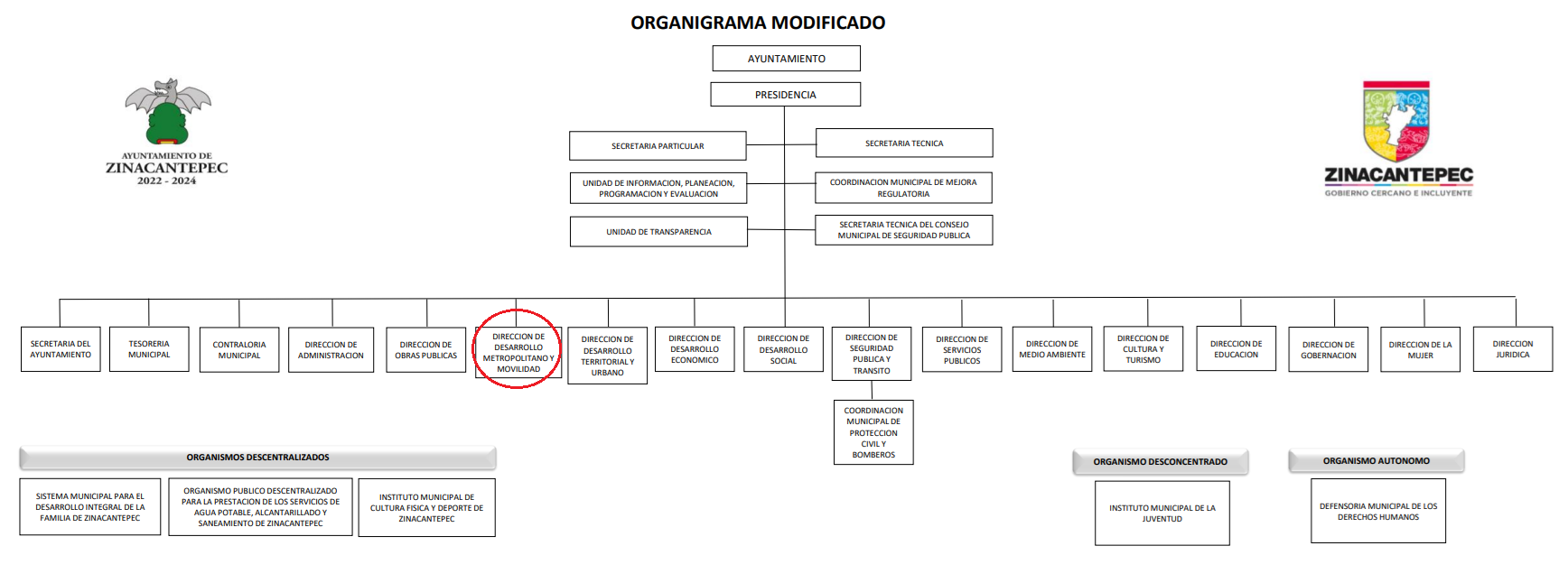
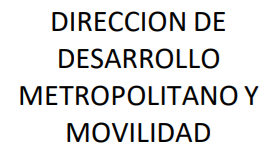
*Artículo 92. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

*(…)*

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

(…)” **(Sic)**

Sirven de sustento las siguientes imágenes ilustrativas:



De lo expuesto con anterioridad, se desprende que **El Sujeto Obligado** se auxilia de diversas Coordinaciones, Direcciones y Departamentos para cumplir con sus fines y objetivos, resultando competente la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad.

En virtud de lo anterior, para delimitar las fronteras conceptuales de la unidad administrativa en cita, resulta oportuno traer a colación el artículo 99 del Bando municipal de Zinacantepec, los numerales 58, 59 y 60 del Reglamento Orgánico Municipal de Zinacantepec; así como el artículo 75 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios, porciones normativas que disponen a la literalidad lo siguiente:

**BANDO MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC**

“Artículo 99. El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, llevará a cabo los principios rectores que, en materia de desarrollo metropolitano y movilidad municipal, basándose en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley de Movilidad del Estado de México, las cuales establecen la Pirámide de Movilidad Urbana Sostenible, con las siguientes prioridades en la vía pública:

I. Personas peatonas.

II. Ciclistas.

III. Transporte público.

IV.Transporte de carga

V. Automóviles y motocicletas” **(Sic)**

**REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DE ZINACANTEPEC**

“Artículo 58. La Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad es la Unidad Administrativa encargada de planear, regular, gestionar y fomentar la movilidad de las personas en el municipio de Zinacantepec, de acuerdo a las disposiciones legales de la materia.

Artículo 59. Además de las previstas en las disposiciones normativas y administrativas en la materia, la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad tiene las siguientes funciones y atribuciones:

I. Realizar el procedimiento y estudio técnico para otorgar el permiso en el cierre de calles, con la finalidad de mejorar la movilidad eficiente y segura en espacios públicos;

**II. Otorgar el Visto Bueno, previo cumplimiento de requisitos para la autorización de base, sitio o lanzadera, en la modalidad del servicio discrecional de automóvil de alquiler (taxi);**

III. Promover que las vialidades y los nuevos desarrollos urbanos cuenten con la accesibilidad para, peatones, personas con movilidad reducida, ciclistas y estacionamientos para bicicletas, basados en los estudios y planes de movilidad, a fin de fomentar el uso de transporte no contaminante; sin perjuicio de las acciones que deben ejecutarse en coordinación con el Estado;

IV. Coadyuvar con las autoridades estatales en la fijando los horarios para la circulación de vehículos de carga, así como los horarios de las zonas de descarga, en base a lo establecido en la legislación Municipal y Estatal;

V. Coadyuvar con las autoridades Estatales, Federales y Municipales según sea el caso, para la liberación de espacios y vías públicas, ocupadas por comerciantes o personas que obstruyan el paso peatonal y el libre tránsito;

VI. Realizar el procedimiento, análisis y estudio técnico de la implementación de reductores de velocidad conforme a la normatividad establecida por el orden público; y

VII. Las demás que señalan las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, o las que señale el Presidente Municipal.

Artículo 60. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad contará con las Unidades Administrativas responsables siguientes, cuyas funciones y atribuciones se determinarán en el Reglamento Interno correspondiente:

I. Subdirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad

a) Departamento de Desarrollo Metropolitano

b) Departamento de Movilidad” **(Sic)**

**LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS**

“Artículo 75. Vinculación del servicio de Taxi y Mototaxi. El servicio de taxi necesariamente deberá estar vinculado a bases, lanzaderas o sitios autorizados por la Secretaría con el visto bueno de los Municipios.” **(Sic)**

Luego entonces, con base en una interpretación literal a las solicitudes de información **00255/ZINACANT/IP/2024** y **00254/ZINACANT/IP/2024** se advierte que la pretensión de la particular radica en acceder a información generada, poseída o administrada específicamente por la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad.

Asimismo, derivado de una interpretación sistemática a la esfera competencial de la unidad administrativa en cita**,** no se advierte disposición expresa que señale que tiene atribuciones para retirar, reubicar o multar bases de taxis.

En sentido contrario, la competencia municipal únicamente radica en otorgar el visto bueno, previo cumplimiento de requisitos para la autorización de base, sitio o lanzadera, en la modalidad del servicio discrecional de automóvil de alquiler (taxi).

Sin embargo, dichas aseveraciones no constituyen una excepción al principio de búsqueda exhaustiva y razonable, imperante en el derecho de acceso a la información.

Una vez sentado lo anterior, como se mencionó en el antecedente segundo, **El Sujeto Obligado** en fecha **dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro,** rindió su respuesta a la solicitud de información, adjuntando para tal efecto lo siguiente:

**00255/ZINACANT/IP/2024**

1. **“SAIMEX-00255-2024.pdf”:** Oficio número **ZIN/DDMyM/369/2024** signado por la directora de desarrollo metropolitano y movilidad, dirigido a la titular de la unidad de transparencia, de fecha treinta de agosto de dos mil veinticuatro, en términos generales se declina competencia a favor de la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

**00254/ZINACANT/IP/2024**

1. **“SAIMEX-00254-2024.pdf”:** Oficio número **ZIN/DDMyM/368/2024** signado por la directora de desarrollo metropolitano y movilidad y dirigido a la titular de la unidad de transparencia, de fecha treinta de agosto de dos mil veinticuatro, en términos generales se declina competencia a favor de la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

Inconforme con las respuestas del **Sujeto Obligado** rendidas el día **dieciocho de septiembre del presente, La Recurrente** interpuso recursos de revisión en fecha **uno de octubre,** admitiéndose el **siete de octubre, ambos de dos mil veinticuatro.**

Siendo las cosas así, mediante el recurso de revisión, **La Recurrente** señaló como motivos de inconformidad:

“Agotaron los 15 días para dar este tipo de respuesta, cuando tenían 3 días para pronunciar su incompetencia, **por ende** **corresponde a la Unidad de Transparencia de Zinacantepec,** **remitir mi solicitud al Sujeto Obligado que refieren en su respuesta**, toda vez que ellos pretenden dilación en el procedimiento de acceso a la información, lo anterior de conformidad con el art. 167 de la Ley de Transparencia Estatal” **(Sic)**

Por otra parte, como fue referido en el antecedente sexto, **El Sujeto Obligado** fue omiso en rendir sus informes justificados.

En este sentido, se comprende que ante las diversas solicitudes tanto de información pública como del ejercicio de los derechos ARCO, se tiene que, en ocasiones, los solicitantes interponen sus solicitudes ante un sujeto obligado que no es el que cuenta con las facultades, competencias o atribuciones para generar, poseer o administrar la información o datos solicitados.

Ante dicha situación, la Ley de Transparencia estatal prevé en su artículo 167, lo siguiente:

***“Artículo 167. Cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud y, en su caso orientar al solicitante, el o los sujetos obligados competentes.***

*Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.*

*Si transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo de este artículo, el sujeto obligado no declina la competencia en los términos establecidos, podrá canalizar la solicitud ante el sujeto obligado competente.”* ***(Sic)***

Del artículo en cita se desprenden las siguientes premisas:

* Que en los supuestos en los que las unidades de transparencia determinen una **notoria incompetencia**, esta situación se deberá hacer del conocimiento de la Recurrente en un término de tres días hábiles posteriores al ingreso de la solicitud y, de ser posible, orientarlo para que dirija su solicitud ante el sujeto obligado competente.
* Que si los sujetos obligados están facultados parcialmente para atender la solicitud están constreñidos a atender dicha parte y notificar la incompetencia en los términos señalados.
* Que una vez transcurridos los tres días establecidos y el sujeto obligado no ha declinado la competencia, puede canalizar la solicitud ante el sujeto obligado competente; empero, esto es potestativo. Luego entonces, el motivo de inconformidad consistente en *“por ende corresponde a la Unidad de Transparencia de Zinacantepec, remitir mi solicitud al Sujeto Obligado que refieren en su respuesta”* deviene infundado.

En ese sentido, dicho artículo indica a los sujetos obligado el procedimiento que deben seguir en los supuestos en los que la incompetencia sea notoria o se trate de una incompetencia parcial; sin embargo, conviene resaltar el significado de «notorio», el cual el Diccionario de la Real Academia Española[[2]](#footnote-2) determinó lo siguiente:

***“notorio, ria***

*Del bajo latín* notorius*.*

1. *adj. Público y sabido por todos.*
2. *adj.* ***Claro, evidente****.*
3. *adj. Importante, relevante o famoso.”* ***(Sic)***

Así, la segunda acepción de notorio es lo que resulta claro y evidente, por lo que se estima que existe una laguna legal debido a que la Ley de Transparencia Local no establece qué se debe llevar a cabo cuando la incompetencia no sea notoria, o bien cuando existan facultades concurrentes entre dos o más sujetos obligados para generar la información solicitada por los particulares.

Ante dicha laguna, el Pleno del Instituto realizó una interpretación a lo dispuesto en los artículos 49 fracción II y 167 de la Ley de la materia y se emitió el criterio reiterado 01/19, en el que se estableció lo siguiente:

***“DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO. SUPUESTO PARA CONFIRMARLA POR ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.***

***El Sujeto Obligado deberá dar el trámite correspondiente a la solicitud de información a efecto de realizar un análisis minucioso de las facultades, competencias o funciones de cada una de las Unidades Administrativas que lo integran y, si posterior a ello, se corrobora la incompetencia para la atención del requerimiento, en razón de que es otro el Sujeto Obligado poseedor de la documentación, corresponde a su Comité de Transparencia confirmar la declaratoria de incompetencia y notificarle dicha determinación al particular, en términos de lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de Transparencia Local****, al ser este el acto jurídico idóneo que genera seguridad jurídica de que el Ente ante quien se presentó la solicitud, carece de facultades, competencias o funciones para poseer o generar la información requerida; lo anterior, sin perjuicio de que pueda gestionar la colaboración de otro Sujeto Obligado competente para atender la solicitud.”* ***(Sic)***

Asimismo, se determinó viable adoptar el criterio con clave de control SO/002/2020 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que a la letra estipula lo siguiente:

***“DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA POR PARTE DEL COMITÉ, CUANDO NO SEA NOTORIA O MANIFIESTA.***

*Cuando la normatividad que prevé las atribuciones del sujeto* ***obligado no sea clara en delimitar su competencia respecto a lo requerido por la persona solicitante y resulte necesario efectuar un análisis mayor para determinar la incompetencia, ésta debe ser declarada por el Comité de Transparencia.” (Sic)***

Así, del contenido de ambos criterios se ha concluido que es necesario que los sujetos obligados hagan entrega del acuerdo que emitan sus Comités de Transparencia mediante los cuales se confirme la declaratoria de incompetencia, con la finalidad de que, ante la incertidumbre derivada de que dicha incompetencia no es clara, evidente o notoria, los sujetos obligados hagan entrega de un documento con el que se determine que no cuentan con las atribuciones para generar, poseer o administrar lo requerido por los solicitantes, esto con apego al el principio de certeza establecido en el artículo 9 fracción I de la Ley estatal.

Cabe señalar que este Instituto también ordenaba la entrega del acuerdo del Comité de Transparencia también se ordena cuando los sujetos obligados no hacen del conocimiento la incompetencia dentro del término de tres días establecido en el artículo 167 referido anteriormente; no obstante, dado que la Ley de la materia no establece expresamente qué se debe realizar ante dicha situación, **se estima** innecesario continuar con el criterio de ordenar la entrega del acuerdo del Comité de Transparencia cuando los sujetos obligados rebasen los tres días y la incompetencia sea notoria, puesto que ordenar a los sujetos obligados emitir dicho acuerdo implica una carga a las autoridades en virtud de que la incompetencia ya fue declarada y ésta es clara y evidente.

En conclusión, se estima que el acuerdo del Comité de Transparencia sólo debe ser ordenado cuando la incompetencia no sea notoria, o bien, cuando mediante el estudio correspondiente del caso en concreto se determine que existen facultades concurrentes entre dos o más sujetos obligados para generar, poseer o administrar la información solicitada.

De esta manera, en el caso en particular la incompetencia es evidente, clara y notoria, resultando innecesario hacer entrega del documento con el que se determine que no cuenta con las atribuciones para generar, poseer o administrar lo requerido, aún y cuando no se observó de forma diligente el plazo previsto en el artículo 167 de la ley de transparencia local. Por ello, ordenar al sujeto obligado emitir dicho acuerdo implicaría una carga a la autoridad en virtud de que la incompetencia ya fue declarada y ésta es clara y evidente.

De forma complementaria, con relación al extracto de inconformidad referente a *“corresponde a la Unidad de Transparencia de Zinacantepec, remitir mi solicitud al Sujeto Obligado que refieren en su respuesta”,* se precisa que deviene infundado, lo anterior tomando como parámetro de referencia una interpretación literal y gramatical del artículo 167 de la Ley de Transparencia local, porción normativa que señala que los **Sujetos Obligados** deberán comunicar la incompetencia y ***“en su caso,*** *orientar al solicitante”.*

Dicho en otras palabras, los **Sujetos Obligados** no se encuentran encauzados a remitir oficiosamente, las solicitudes de información ajenas a su esfera competencial, sino que por el contrario, en el caso en particular, la simple comunicación de la notoria incompetencia al propio ciudadano, resulta suficiente para atender el derecho de acceso a la información pública, al quedar a salvo sus derechos para ejercer nuevamente la multicitada prerrogativa constitucional frente al  **Sujeto Obligado** competente, en razón de las atribuciones reservadas.

Insistiendo en que el acuerdo de Comité de Transparencia sólo debe ser ordenado cuando la incompetencia no sea notoria, o bien, cuando mediante el estudio correspondiente del caso en concreto se determine que existen facultades concurrentes entre dos o más sujetos obligados para generar, poseer o administrar la información solicitada, hipótesis fácticas que no se actualizan en el presente medio de impugnación.

En virtud de lo anterior, este Órgano Garante arriba a la conclusión de que la respuesta primigenia del **Sujeto Obligado** se encuentra dotada de los principios de congruencia y exhaustividad, los cuales a toda luz garantizan el derecho de acceso a la información pública. Robustece lo anterior el criterio **02/17** del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que dispone a la literalidad lo siguiente:

***“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.***

*De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7****; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad.*** *Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.*

* *RRA 0003/16 Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.*
* *RRA 0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.*
* *RRA 1419/16 Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.”* ***(Sic)***

Con base en lo anteriormente expuesto, se arriba a la conclusión de que la respuesta del **Sujeto Obligado** colmó el derecho de acceso a la información ejercido por el particular.

Con independencia de los argumentos previamente expuestos, se dejan a salvo los derechos de la **Recurrente** para ejercer su derecho de acceso a la información, realizando una nueva solicitud al **Sujeto Obligado** estimado competente para atender sus requerimientos.

En mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan infundados los motivos de inconformidad que arguye **La Recurrente** en sus medios de impugnación que fueran materia de estudio, por ello con fundamento en el artículo 186 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **CONFIRMAN** las respuestas a las solicitudes de información números **00255/ZINACANT/IP/2024** y **00254/ZINACANT/IP/2024** que han sido materia del presente fallo.

Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y,

**SE RESUELVE**

**PRIMERO.** Se **CONFIRMAN** las respuestas entregadas por **El Sujeto Obligado** a las solicitudes de información números **00255/ZINACANT/IP/2024 y 00254/ZINACANT/IP/2024** por resultar infundados los motivos de inconformidad que arguye **LA RECURRENTE,** en términos del **Considerando CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO. Notifíquese**la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX).**

**TERCERO**. **Notifíquese** la presente resolución a **LA RECURRENTE** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX).**

**CUARTO.** Se hace del conocimiento de **LA RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO ACORDÓ, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

CCR/JCMA

1. ***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.***

   *Del examen de compatibilidad de los artículos*[*73 y 74 de la Ley de Amparo*](javascript:AbrirModal(1))*con el artículo*[*25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*](javascript:AbrirModal(2))***no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Consultado en <https://dle.rae.es/notorio> [↑](#footnote-ref-2)